Articular la Educación Superior con el Ecosistema CTCI: Dilemas, Desafíos y Propuestas

Carla Fardella Pablo González

Centro de Investigación para la Educación Inclusiva

Síntesis

La débil articulación entre las instituciones de educación superior (IES) y el ecosistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI) constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo de un marco regulatorio coherente y sostenible que oriente la relación entre formación universitaria, investigación científica y necesidades del país. Aunque Chile ha avanzado en cobertura educativa y en el fortalecimiento de capacidades científicas, persiste una fragmentación institucional que debilita la coordinación entre actores, distorsiona los incentivos y desconecta los esfuerzos formativos e investigativos de los desafíos sociales y territoriales.

Este documento propone un conjunto de recomendaciones orientadas a mejorar la gobernanza intersectorial, rediseñar los instrumentos de financiamiento y consolidar nodos territoriales que promuevan sinergias entre formación, investigación e innovación. Las propuestas se nutren de evidencia empírica, experiencias regionales exitosas y lineamientos internacionales recientes que abogan por transformar la educación en clave de justicia social, sostenibilidad e inclusión.

Recomendaciones

a. Establecer una gobernanza intersectorial entre educación superior y ciencia

Descripción: Articular las políticas del sistema de educación superior y del ecosistema CTCI mediante una institución de coordinación permanente (por ejemplo, un consejo intersectorial) con participación de la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de Ciencia, ANID y representantes regionales. Este espacio debe permitir la planificación integrada de capital humano, agendas de investigación y estrategias territoriales.

Iniciativa vigente a reforzar: El Plan de Acción para el fortalecimiento de la I+D+i en universidades presentado por MinCiencia en julio de 2024, en alianza con ANID, MINEDUC y CNA, plan en conjunto que puede institucionalizarse como espacio intersectorial estable.

Apoyo UNESCO 2024: Se alinea con su recomendación de adoptar enfoques múltiples y contextualizados para transformar sistemas educativos mediante colaboración institucional eficaz (UNESCO,2024).

b. Diseñar un marco común de indicadores entre educación superior y CTCI

Descripción: Desarrollar indicadores compartidos que midan impacto territorial, colaboración interinstitucional, valor público del conocimiento, movilidad y altmetrics. Estos permitirán orientar políticas, asignaciones presupuestarias y evaluación de resultados desde una lógica sistémica e integrada.

^{*} Formato de citación: Fardella, C.; González, P. (2025). Articular la Educación Superior con el Ecosistema CTCI: Dilemas, Desafíos y Propuestas. Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.



Iniciativa vigente a reforzar: Integrar métricas alternativas (**altmetrics**) en sistemas de evaluación institucional y científica, valorando visualizaciones, descargas, menciones en prensa, redes sociales, y repositorios.

Apoyo UNESCO 2024: Promueve la mejora de la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas mediante sistemas robustos de datos e indicadores.

c. Rediseñar instrumentos de financiamiento para fomentar el fortalecimiento regional y la colaboración interregional

Descripción: Modificar fondos concursables e incorporar nuevas líneas que premien iniciativas interinstitucionales, proyectos de largo plazo e interdisciplinarios con enfoque de valor público, que integren formación, investigación y vinculación con el entorno. Al mismo tiempo, deben revisarse los mecanismos de renovación de los centros que se van consolidando, y no someterlos a las mismas reglas que los centros nuevos. Esto requiere moverse de una lógica competitiva de licitación de fondos, adecuada para la entrada de nuevas iniciativas, hacia una lógica de contratos relacionales, que permitan consolidar los activos específicos desarrollados por centros que son exitosos; promoviendo la colaboración en la formación conjunta entre las universidades de la Región Metropolitana y las universidades regionales, que apunten hacia la superación de un modelo de organización centralista por uno de colaboración interregional y potenciar el valor público no solo en investigación, sino también formación y vinculación, mediante la negociación periódica de los contratos.

Iniciativas vigentes a reforzar: Los fondos InES Ciencia Abierta e InES I+D de ANID, que ya estimulan la colaboración institucional y la transferencia, pueden ampliarse con mayor presupuesto y alcance regional. También, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), gestionado por los gobiernos regionales (GORE), que financia proyectos de innovación aplicada local.

Apoyo UNESCO 2024: Indica que la transformación educativa requiere financiamiento sostenido, coherente y estratégico.

d. Incorporar al subsistema técnico-profesional dentro de las políticas de innovación

Descripción: Diseñar mecanismos que permitan la participación activa de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en ecosistemas regionales de innovación. Este enfoque reconoce su rol en la formación aplicada y su vínculo con sectores productivos locales, contribuyendo al cierre de brechas estructurales.

Iniciativas vigentes a reforzar: El Programa FIU Territorial de MinCiencia/ANID que promueve capacidades de I+D en universidades regionales, puede abrir líneas específicas para incluir al subsistema técnicoprofesional con planes institucionales adaptados.

Apoyo UNESCO 2024: Resalta la necesidad de incluir todos los niveles educativos en mecanismos que atiendan la pluralidad de contextos y necesidades (UNESCO, 2024).

e. Mejorar la coordinación inter sectorial

Descripción: Crear una institucionalidad que permita la coordinación del sector privado, las instituciones de educación superior y las agencias públicas a cargo de educación superior y ciencia y tecnología, cuya misión sea avanzar en la adopción y financiamiento de I&D nacional por parte del sector privado.

Iniciativas vigentes a reforzar: Existen iniciativas fomentadas desde el sistema de acreditación como la ponderación de la vinculación con el medio en la acreditación institucional o la promoción de los doctorados industriales. Asimismo, ANID ha impulsado iniciativas de inserción del capital humano avanzado en el sector productivo y, desde más larga data, fondos concursables que privilegian la investigación aplicada, como el FONDEF.

Desafíos para el futuro de la educación superior

En perspectiva comparada, Chile presenta la tasa más alta de gasto en educación superior como porcentaje del PIB entre los países de la OCDE (2,6%), si se considera la inversión pública y privada combinada. Sin embargo, esta



inversión no se traduce necesariamente en mayores niveles de calidad, equidad o pertinencia. Tal como señalaba Banco Mundial-OCDE (2009, pp. 11–17), el país aún enfrenta problemas estructurales vinculados a la segmentación institucional, currículos inflexibles, y mecanismos de financiamiento que no favorecen la equidad ni el desarrollo estratégico del sistema. A ello se suma que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) continúa siendo una de las más bajas del bloque OCDE, alcanzando solo el 0,39% del PIB en 2022, frente a un promedio de 2,7% en la OCDE y 4,96% en Corea (OCDE, Main Science and Technology Indicators, en https://data-explorer.oecd.org). Esta brecha refleja una desconexión estructural entre el sistema de formación superior y la producción de conocimiento.

A nivel regional, los desafíos chilenos se enmarcan en un panorama iberoamericano que también enfrenta tensiones entre democratización del acceso y gobernanza efectiva. Las universidades de la región comparten problemas como la tensión entre autonomía institucional y regulación estatal, la fragmentación de sistemas de aseguramiento de la calidad, y la dificultad para articular procesos de innovación y formación de capital humano con las necesidades sociales y productivas (Gairín y Leiva, 2024). En este contexto, se hace necesario repensar los modelos de gestión universitaria desde una perspectiva integral, que articule los niveles organizativos, pedagógicos y territoriales, y que respondan a los retos contemporáneos desde marcos institucionales más flexibles, participativos y estratégicos.

Pensar el futuro de la educación superior requiere asumirla como un sistema (González, 2025) que interactúa con otros sistemas: en los puntos de entrada, con el sistema escolar, y en los de salida, con el sistema productivo y el mercado laboral. Su proyección, además, debe articularse con las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y con la, aún pendiente, estrategia de desarrollo nacional. El financiamiento y la regulación no son fines en sí mismos, sino medios que deben facilitar el funcionamiento deseado del sistema, cuya orientación debiera ser el eje central de toda política para el sector. La OCDE ha identificado precisamente la falta de compatibilidad entre los marcos regulatorios, de financiamiento y calidad entre la educación superior y la política científica como uno de los principales obstáculos para una estrategia integrada (OCDE, 2025, pp. 6-7).

Una articulación pendiente: educación superior y política científica en Chile

Aunque el sistema de educación superior chileno enfrenta diversas tensiones estructurales, este apartado pone el foco en una dimensión clave: la débil articulación entre las instituciones de educación superior y el ecosistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI). Esta desconexión limita la capacidad del país para transformar conocimiento en desarrollo, afectando tanto la calidad formativa como el potencial de producción científica con impacto territorial. Educación superior y CTCI operan actualmente bajo marcos institucionales separados, con escasa coordinación entre sus instrumentos de planificación, financiamiento y evaluación. El desafío se manifiesta en diversos ámbitos: (a) una arquitectura institucional disociada y ausencia de gobernanza compartida; (b) brechas territoriales persistentes en infraestructura y capacidades; (c) una estrategia de internacionalización fragmentada y sin criterios de equidad; (d) modelos de producción científica centrados en la competencia individual que invisibilizan prácticas no convencionales y (e) barreras culturales que dificultan la cooperación interdisciplinaria e interinstitucional.

Abordar estas dimensiones resulta clave para avanzar hacia una política de conocimiento coherente, inclusiva y orientada al bien público.

(a) Arquitectura institucional fragmentada y ausencia de gobernanza integrada

La articulación entre educación superior y CTCI en Chile se ve obstaculizada por una arquitectura institucional fragmentada, en la que los sistemas de formación, investigación y desarrollo operan bajo marcos regulatorios, agencias y prioridades desconectadas. Mientras el Ministerio de Educación se encarga del sistema de educación superior, el Ministerio de Ciencia —creado en 2019— dirige la política de I+D+i, sin que exista un organismo interministerial de coordinación estratégica (OCDE, 2024, p. 11). Esta separación dificulta el diseño de agendas compartidas, dificulta la articulación territorial y reduce la efectividad del sistema en su conjunto. Como advierte la OCDE, "la falta de compatibilidad entre marcos regulatorios, sistemas de



aseguramiento de calidad y mecanismos de financiamiento" constituye un obstáculo central para construir estrategias nacionales de conocimiento coherentes (OCDE, 2025, p. 6). La fragmentación también se expresa en la ausencia de una política integral de formación e inserción de capital humano avanzado: Chile no cuenta con una estrategia nacional para los recursos humanos en investigación, y muchos doctores formados en el extranjero enfrentan condiciones laborales inestables a su regreso (OCDE, 2024, p. 10). En paralelo, el sistema universitario presenta altos niveles de precariedad académica: el 76% del personal docente trabaja con contrato a plazo fijo y apenas un 16,9% posee grado de doctor, con fuertes brechas regionales (SIES, 2024, pp. 5-9). Una estructura de gobernanza compartida que coordine políticas formativas y científicas potenciaría el desarrollo de un ecosistema articulado de conocimiento.

(b) Brechas territoriales en infraestructuras y capacidades

Uno de los principales obstáculos para construir un ecosistema articulado de conocimiento en Chile es la persistencia de profundas brechas territoriales en materia de financiamiento, capacidades institucionales e infraestructura científica. Estas desigualdades afectan tanto a las universidades regionales como a centros de formación técnico-profesional, que enfrentan mayores dificultades para acceder a fondos competitivos, atraer y retener capital humano avanzado, y sostener proyectos de investigación con proyección local. Según datos del SIES, en 2024 solo el 16,9% del personal académico en el país posee grado de doctor, y esta proporción disminuye significativamente fuera de la Región Metropolitana (SIES, 2024, p. 5). A su vez, más del 76% del cuerpo académico trabaja bajo contratos a plazo fijo, lo que refleja una débil institucionalidad para el desarrollo de carreras científicas estables en buena parte del territorio nacional (SIES, 2024, p. 8). Estas asimetrías están fuertemente asociadas a la concentración de recursos y capacidades en pocas instituciones, lo que reproduce una lógica centro-periferia que limita la producción de conocimiento pertinente para los contextos locales. La OCDE ha advertido que en países como Chile, donde no existen mecanismos efectivos de distribución territorial del financiamiento, "la excelencia tiende a concentrarse en núcleos institucionales y geográficos, lo

que debilita las posibilidades de innovación fuera de esos polos" (OCDE, 2024, p. 12). Además, la baja inversión en investigación y desarrollo restringe la posibilidad de implementar políticas activas de fortalecimiento regional, ya que la mayoría de los instrumentos siguen operando bajo esquemas competitivos y sin criterios explícitos de equidad territorial (OECD, 2020, p. 29). Esta fragmentación territorial tiene consecuencias concretas: dificulta la consolidación de comunidades científicas regionales, restringe la vinculación entre conocimiento y sectores productivos locales, y desincentiva la inserción de investigadores jóvenes fuera de Santiago.

(c) Internacionalización sin estrategia nacional ni criterios de equidad

Chile ha impulsado diversas iniciativas de internacionalización en los últimos años, tanto en educación superior como en ciencia y tecnología. Sin embargo, estas acciones han carecido de una estrategia nacional articulada que vincule los esfuerzos de internacionalización con prioridades de desarrollo, integración territorial o equidad institucional. Según la OCDE, aunque existen instrumentos que promueven la movilidad académica y la colaboración internacional, estos están altamente concentrados en instituciones de élite y en áreas disciplinares específicas, lo que genera un patrón de "internacionalización por acumulación" que reproduce desigualdades internas y no necesariamente fortalece la capacidad científica del país en su conjunto. A diferencia de países que han definido políticas integradas de internacionalización con orientación territorial —como los casos de Finlandia o Noruega—, Chile no cuenta con mecanismos que aseguren la participación equilibrada de instituciones regionales ni del subsistema técnico-profesional en redes internacionales. Como advierte OECD (2020), en contextos de baja inversión en I+D, la internacionalización tiende a convertirse en una práctica excluyente, limitada a grupos institucionales con mayor infraestructura y trayectoria consolidada. La falta de una estrategia nacional coherente también dificulta que la internacionalización se alinee con prioridades país, como la formación de capital humano avanzado en áreas estratégicas, la investigación en problemas locales de alta complejidad o la transferencia de tecnologías apropiadas para contextos diversos.



(d) Modelos de producción científica centrados en la competencia individual

El sistema chileno de ciencia y educación superior ha adoptado un modelo de producción científica fuertemente orientado a la competencia individual, impulsado por sistemas de evaluación que privilegian la productividad cuantificable por sobre otros criterios de valor público. La estructura de financiamiento se basa mayoritariamente en fondos concursables individuales (como FONDECYT) y en criterios de evaluación asociados a publicaciones en revistas indexadas, número de proyectos adjudicados y métricas internacionales de impacto. Este diseño ha consolidado una lógica de "supervivencia académica" en la que las trayectorias de investigación dependen más de la capacidad individual de competir que de la pertinencia del conocimiento generado o de su contribución territorial o social. Según la OCDE, este énfasis competitivo ha tenido efectos directos en la precarización de las carreras académicas: más del 70% de los investigadores en Chile no tienen contratos estables, y gran parte de la producción científica se concentra en núcleos institucionales con mejor acceso a redes y financiamiento.

En este contexto, se invisibilizan múltiples prácticas científicas que no se ajustan a los estándares dominantes de excelencia. La investigación desarrollada en colaboración con comunidades locales, la divulgación científica, la producción de conocimiento orientado a políticas públicas o la investigación-acción con enfoque de género o decolonial no son reconocidas ni incentivadas por los actuales mecanismos de evaluación y financiamiento. Como señala la OCDE, los sistemas que dependen excesivamente de métricas bibliométricas tienden a excluir investigaciones socialmente relevantes que operan fuera de los circuitos académicos convencionales. Superar esta lógica implica revisar en profundidad los sistemas de evaluación y financiamiento, incorporando criterios de valor público, colaboración efectiva y pertinencia territorial. También requiere reconocer institucionalmente otras formas de producción de conocimiento que hoy operan en los márgenes del sistema, y que sin embargo son fundamentales para democratizar la ciencia, enriquecer sus métodos y expandir su impacto social.

(e) Barreras culturales a la cooperación interdisciplinaria e interinstitucional

Más allá de las limitaciones estructurales y financieras, el ecosistema chileno de educación superior y ciencia enfrenta barreras culturales persistentes que obstaculizan la cooperación entre disciplinas, instituciones y sectores sociales. Estas barreras no solo tienen origen histórico, sino que son reforzadas por sistemas de evaluación académica que premian trayectorias individuales y disciplinarias, dificultando la construcción de comunidades de conocimiento colaborativas. La OCDE ha advertido que, en ausencia de incentivos adecuados, "los investigadores tienden a evitar el trabajo interdisciplinario por considerarlo arriesgado, menos valorado y más complejo en términos de resultados evaluables". La autonomía disciplinar, las tradiciones epistemológicas cerradas y la falta de estructuras institucionales que favorezcan el trabajo en red configuran un entorno poco propicio para la generación de conocimiento intersectorial y orientado a problemas complejos. Estas barreras también se expresan en el bajo reconocimiento institucional a iniciativas que buscan incorporar enfoques de género, diversidad cultural, saberes indígenas o vinculación comunitaria en la investigación. Transformar estas culturas requiere estructuras de apoyo, formación y evaluación que reconozcan la complejidad de los problemas contemporáneos y la necesidad de abordarlos desde enfoques colaborativos y transdisciplinarios.

(f) Limitada colaboración intersectorial

La inversión en I+D+i en Chile además de baja, registra escasa participación del sector privado (0.16% del PIB tanto en gasto interno como por fuentes para 2022 de acuerdo a MSCI Indicators 2024). En los países donde la inversión en investigación es más alta, la inversión en las empresas es mayoritaria: 5,9% del PIB en Israel, 3,93% en Corea, 2,72 en Japón, 2,7% en EEUU, y 2,68% en Suecia (2023). Asimismo, el financiamiento de las empresas a la I+D+i representa 2,92% del PIB en Israel, 3,77 en Corea, 2,68% en Japón, 2,4% en EEUU y 2,07% en Suecia (todas las cifras 2023 excepto la última, que corresponde a 2021). Es necesario abordar esta brecha, que es clave para in-



crementar la productividad y el crecimiento económico. Si bien la baja inversión se relaciona con las características del aparato productivo, una estrategia en esta materia requeriría abordar la desconfianza entre actores y generar instrumentos que orienten esta colaboración hacia objetivos compartidos. La experiencia comparada muestra que superar esta fragmentación implica no solo fomentar vínculos bilaterales, sino construir plataformas estructurales de co-producción del conocimiento, con incentivos específicos, normativas claras y marcos de gobernanza conjunta que reconozcan los distintos tiempos, lenguajes y objetivos de cada sector. La colaboración efectiva entre universidades, sector privado y gobierno requiere no solo voluntad, sino también capacidades institucionales y mecanismos estables que la hagan posible.

Fortalezas, oportunidades y proyección futura: hacia un ecosistema articulado para el conocimiento y el desarrollo

Pese a los desafíos estructurales diagnosticados, el sistema chileno de educación superior y ciencia cuenta con condiciones habilitantes clave para avanzar hacia una articulación más coherente, inclusiva y territorialmente equilibrada. Chile dispone de más de 60 instituciones de educación superior acreditadas, incluyendo 30 universidades con actividades de investigación reconocidas. Además, programas como FIU Territorial, InES I+D y Ciencia Abierta han movilizado más de \$84 mil millones de pesos hacia universidades regionales y centros de innovación en los últimos años, consolidando capacidades instaladas que pueden ser apalancadas en nuevas estrategias de colaboración formativa, investigativa y territorial.

Por otra parte, el escenario político reciente ofrece ventanas de oportunidad: la instalación del Consejo Asesor para la Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior, la formulación participativa de la nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el lanzamiento del Plan de Acción para el fortalecimiento de la I+D+i en las IES (julio 2024) representan avances concretos hacia una gobernanza más integrada. Al mismo tiempo, los Gobiernos Regionales han

comenzado a financiar activamente proyectos de innovación con participación universitaria mediante el **Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD)**, mostrando interés en modelos de desarrollo territorial basados en conocimiento.

En este contexto, la **infraestructura digital existente**, como el **SIES**, los observatorios CTCI y las plataformas de ciencia abierta, habilita nuevas formas de cooperación interinstitucional, planificación compartida y seguimiento de políticas mediante indicadores interoperables. La inclusión de **altmetrics** —métricas alternativas como visualizaciones, citaciones en redes y circulación social del conocimiento— puede enriquecer las formas de evaluar el impacto académico y social del sistema.

Estas fortalezas no deben ser vistas como logros aislados, sino como palancas estratégicas para una transformación sistémica.

El diagnóstico muestra con claridad que la desconexión entre el sistema de educación superior y el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile constituye no solo una **debilidad estructural**, sino también una **oportunidad estratégica**. Avanzar hacia una mayor articulación entre ambos ámbitos no requiere partir desde cero, sino **reconocer**, **reforzar y escalar** las iniciativas que ya existen —aunque muchas veces dispersas— en diversas instituciones del Estado, del mundo académico y de los territorios.

Las recomendaciones aquí planteadas apuntan a superar la actual fragmentación institucional y territorial del sistema. Para ello, se requiere una gobernanza intersectorial con visión de largo plazo, que alinee políticas de formación, investigación y desarrollo territorial desde una lógica sistémica. Esta transformación debe ir acompañada de un rediseño de los instrumentos de evaluación y financiamiento, de un compromiso con la equidad territorial, y del reconocimiento institucional de diversas formas de producir y aplicar conocimiento.

El fortalecimiento de capacidades científicas en todo el país, la inclusión del subsistema técnico-profesional en la agenda de innovación, y la promoción de una cultura académica **colaborativa y socialmente pertinente** son pasos ineludibles para construir un ecosistema de cono-



cimiento que contribuya al desarrollo justo, sostenible y democrático del país. Esto exige voluntad política, coordinación efectiva y una visión compartida que entienda a la educación superior y la ciencia no como esferas separadas, sino como pilares interdependientes de una estrategia nacional de futuro.

Referencias

Banco Mundial & Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2009). *La educación superior en Chile: Mejorar la calidad y la equidad*. Banco Mundial/OCDE.

http://documents.worldbank.org/ publication/documents-reports/ documentdetail/78676148017975908/

Fardella, C., D. Marchant & E. Baleriola (2024). Métrica, Subjetividad y Meritocracia en el Trabajo Académico. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 22(2), 51-66. https://doi.org/10.15366/reice2024.22.2.003

Gairín, J., & Leiva (Eds.). (2024). *Gestión educativa en Iberoamérica: Modelos, prácticas y desafíos.* RedAGE-Iberoamérica / Editorial Octaedro. https://www.redage.org/publicaciones/gestion-

educativa-en-iberoamerica-modelos-practicas-ydesafios González, P. (2025, enero). Discurso en el inicio del trabajo del Consejo Asesor para la Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior. Subsecretaría de Educación Superior, Gobierno de Chile.

OECD. (2025). Policies for transnational collaboration in higher education (OECD Education Policy Perspectives No. 121). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e07d8c0fen.Servicio de Información de Educación Superior. (2024). Personal académico en educación superior 2024. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

OECD. (2024). Resourcing higher education: Institutional and system-level funding policies. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5e9291bf-en

OECD (2020), Resourcing Higher Education: Challenges, Choices and Consequences, Higher Education, OECD Publishing, Paris,

https://doi.org/10.1787/735e1f44-en.

Servicio de Información de Educación Superior (SIES). (2024). Personal académico en educación superior 2024. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

UNESCO. (2024). Transformar la educación para alcanzar el ODS 4: Informe de una encuesta mundial sobre las medidas adoptadas por los países para transformar la educación

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388132



Acerca de los autores



Carla Fardella

Doctora Cum Laude en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora titular de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Investigadora principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del proyecto Erasmus+ de la Comunidad Europea sobre escuelas innovadoras. Especialista en educación superior, carreras científicas y políticas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI). Actualmente integra el Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior.



Pablo González

Doctor en economía, Universidad de Cambridge. Investigador principal de la línea de Valor Público en Educación del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Actualmente preside el Consejo Asesor de la Estrategia para la Educación Superior.

Centro Eduinclusiva

Buscamos desarrollar investigación transdisciplinaria sobre los factores individuales, organizativos y de política necesarios para lograr una educación inclusiva de calidad; apoyar mediante la propuesta y la transferencia de intervenciones y estrategias basadas en la evidencia para una educación inclusiva; y formar capital humano avanzado para la investigación en educación inclusiva.

Serie Policy Briefs

El Área de Incidencia en Política Pública del Centro Eduinclusiva desarrolla una serie de Policy Briefs –documentos denominados "Propuestas para Políticas Educativas"— que tienen por objetivo aportar al debate público en pos de la transformación del sistema educativo hacia la inclusión y la calidad.



Av. El Bosque 1290, Vina del Mar Campus Sausalito PUCV ciecomunicaciones@pucv.cl 32 - 237 2575

Proyecto CIE160009 Financiado por Programa ANID SCIA

